

Ataque a Lavín y violencia en política

Invité al Ministro de Educación Joaquín Lavín a presentar un libro sobre las universidades privadas en Chile. Fue una reunión grata, había más de diez rectores de prestigiosos planteles de educación superior e intercambiamos ideas acerca del aporte que ellas hacían al país. Y de repente todo cambió: un grupo de cerca de 40 estudiantes irrumpieron por la fuerza en la sala del Centro Cultural Gabriela Mistral, levantaron un lienzo, gritaron consignas, después insultos, se acercaron amenazadores al ministro y empezaron los empujones y los golpes. Afortunadamente el ministro salvó ileso de la brutal agresión.

Pero no ha sido éste el único hecho. El ministro Luciano Cruz-Coke sufrió la toma de sus oficinas en Valparaíso. La ministra Von Baer fue insultada en la ciudad de Arica. El alcalde de Santiago, Pablo Za-

laquett, fue apedreado en un liceo de la capital. Hace unos días, en marchas realizadas en Santiago y otras ciudades para protestar por HidroAysén, se realizaron acciones vandálicas por parte de grupos de manifestantes, que agredieron cobardemente a carabineros. Varias escuelas en Santiago y regiones se encuentran actualmente tomadas por grupos de alumnos.

En cada uno de estos hechos hay violencia, en distintos grados, pero violencia al fin. Golpes y patadas arteras, lanzamiento de elementos incendiarios, proyectiles, insultos, daños a la propiedad pública y privada. Se impide, también, la libre circulación de personas, se interrumpen las actividades de los ciudadanos que quieren desarrollar su vida normal.

Algunos pretenden justificar estos hechos señalando que la autoridad no escucha a quienes protestan o agreden. Eso es falso, es una vulgar mentira; afirmarlo es

hacerse cómplices de los violentos. Las autoridades siempre han escuchado a quienes plantean en forma respetuosa sus demandas. Los violentistas no desean ser escuchados, quieren hacer daño, amedrentar, imponer por la fuerza sus puntos de vista.

En el caso de la agresión al ministro Lavín yo estaba ahí, así es que no me cuenten cuentos. No pretendían ser escuchados sino que querían agredir. Estaba todo preparado, ingresaron sus propias cámaras, grabaron y a los diez minutos estaban las fotos en la web.

Estos hechos son una negación de la democracia y una muestra de

intolerancia inaceptable. Vivimos en una democracia, hay cauces para reclamar; pero los violentistas no los utilizan. No les interesa.

La Concertación gobernó durante 20 años, sin que se recuerden agresiones a autoridades como las que hemos vivido. ¿Por qué ahora, que gobierna la centro-derecha, está pasando esto?

Chile tiene un triste registro en materia de violencia política. Es innegable que



la violencia jugó algún rol en la pérdida de la democracia en nuestro país. La Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, convocada por el Gobierno el 2000, declaró que "Chile sufrió a partir de la década de los 60 una espiral de violencia política que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen legítimamente distintas opiniones."

No se trata de ser alarmistas, pero estos procesos son largos y los gérmenes de

violencia deben detenerse apenas aparecen. El 2003 Libertad y Desarrollo y la Universidad Finis Terrae publicaron el libro "Los Hechos de Violencia en Chile: del discurso a la acción", en que se constata que entre el 4 de noviembre de 1958 y el 10 de septiembre de 1973 se produjeron 1.175 hechos de violencia política. Están clasificados entre Incidentes, Tomas, Agresiones, Enfrentamientos, Atentados, Allanamientos, Asaltos y Secuestros, y fueron aumentando progresivamente hasta el año 1973.

El ministro Lavín ha señalado que no lo amedrentarán y continuará sus reformas y varias organizaciones estudiantiles repudiaron el ataque, lo que es positivo. Este repudio debiera ser generalizado entre los actores políticos y extenderse a toda manifestación de violencia en política. Es lo mínimo que el país puede exigir. ■

SE PRETENDE JUSTIFICAR HECHOS DE VIOLENCIA SEÑALANDO QUE LA AUTORIDAD NO ESCUCHA A QUIENES PROTESTAN. ESO ES FALSO; AFIRMARLO ES SER CÓMPLICE DE LOS VIOLENTOS.

LUIS LARRAÍN

